

habérsele formado proceso y teniéndole en prisión sin haber dictádose el auto motivado; y que esos actos atacan las garantías á que se refieren los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, se decreta: Que se confirma la sentencia pronunciada el 20 del próximo pasado por el juez de Distrito de Veracruz, que declara: que la Justicia Federal ampara y protege al C. Laureano Hernández contra las providencias dictadas por el O. Gefe político de Córdoba, relativas á ejecutar las órdenes que le fueron libradas por el O. Gobernador del Estado para detenerlo, y del O. Ministro de Guerra y Marina para que sea destinado al servicio de las armas.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simón Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, 9 de Octubre de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Luz Romero á nombre de su marido Francisco Martínez, contra el Gefe político de esa ciudad que lo consignó al servicio de las armas.

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Puebla, Octubre 1º de 1872.—Visto

este juicio de amparo promovido por el C. Francisco Martínez por el hecho de haber sido consignado al servicio de las armas por el Gefe de la policía: el escrito de queja: el informe producido por la autoridad responsable: y cuanto ha sido de verse. Considerando: que el quejoso motiva su pretension de que se le ampare por la justicia Federal en que ha violándose en su perjuicio el art. 5º de la Constitución y la ley de suspension de garantías de 17 de Mayo del presente año, con haber sido consignado al ejército: y que al no haber acreditado en manera alguna sus excepciones bien ha podido ser destinado á cubrir las bajas del ejército con arreglo á la ley á que se refiere, sin que por lo tanto le favorezca el artículo 5º de la Constitución. Con fundamento de lo expuesto se declara: que la Justicia de la Union no ampara al C. Francisco Martínez por haber sido consignado al servicio de las armas. Hágase saber: sáquense las copias respectivas para la publicacion de este auto en el periódico oficial del Estado y en el "Semanario Judicial de la Federación" y elévese el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El O. juez de Distrito definitivamente juzgando lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero.*—*Anto mí, Antonio García Mozqueira.*

Es copia que certifico para su insercion en el "Semanario Judicial."

Puebla, Octubre 2 de 1872.—*Antonio G. Mozqueira*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 14 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Luz Romero á nombre de su marido Francisco Martínez, contra el Gefe político de esa ciudad que lo consignó al servi-

cio de las armas, y considerando: que no está probado en el expediente que la consignacion hubiese sido hecha legalmente, y por lo mismo ataca la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitución Federal, se decreta: Que se revoca la sentencia pronunciada el 1º del actual por el juez de Distrito de Puebla que niega el amparo, y se declara: que la Justicia Federal ampara y protege á Francisco Martínez contra su consignacion al servicio de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velázquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 16 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido por el C. Juan Pardo, ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, contra la legislatura del Estado que declaró nula la eleccion de diputado á la propia legislatura hecha en el quejoso por el Distrito de Cadereyta.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que cuando examinada cuidadosamente la organizacion de la justicia federal se llega á considerar el conjunto de sus atribuciones,

fácilmente se comprende que estas son en gran parte política, teniendo por único objeto hacer ejecutar las leyes de la Union en todas las cuestiones sometidas á su fallo.

Arreglando estas leyes las relaciones del gobierno con los gobernados y de la nacion con los extranjeros, natural es que se haya acudido á los tribunales de la federacion pidiendo el amparo correspondiente por un español de nacimiento que en pleno goce de los derechos de ciudadano mexicano ha sido estorbado en su ejercicio por un acuerdo de la legislatura del Estado.

El C. Juan Pardo disfrutaba de los derechos de mexicano cuando fué electo diputado al congreso de Querétaro por el Distrito de Cadereyta. La legislatura erigida en colegio electoral declaró que aunque esta eleccion era legítima, faltaban á Pardo los requisitos de ser mexicano, ciudadano mexicano, y por consiguiente ciudadano queretano. Todos los que se avencindan en el Estado y tienen las circunstancias que exige el art. 30 de la Constitución federal para ser mexicanos, son ciudadanos queretanos. Como Pardo ha estado avencindado en Querétaro es consiguiente que disfrute de los derechos de ciudadano queretano, siempre que tenga los de mexicano.

Se encuentran plenamente probados en este expediente dos hechos capitales; 1º: que el C. Juan Pardo tiene hijos mexicanos y bienes raíces en la República; 2º: que no ha manifestado la resolucion de conservar su nacionalidad española. Cinco testigos caracterizados y mayores de toda excepcion han declarado sobre estos puntos, formando así la prueba completa de que habla la ley 32, tit. 16, part. 3ª. Dos boletas que obran en autos demuestran que Pardo está inscrito en la guardia nacional desde el año de 1869 y que está su nombre registrado en el padron de la municipalidad. Esas boletas deben calificarse entre los documen-